



Información Migratoria Nacional

La novena caravana del mes sale de Tapachula



Tapachula. Migrantes varados en Tapachula, Chiapas, salen hoy en caravana rumbo a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en un camino con clima extremo que va de las altas temperaturas a las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días y a los peligros de caminar por la carretera costera de Chiapas.

Migrantes de distintas nacionalidades se organizaron en el parque Bicentenario para salir en la novena caravana del mes con la intención de llegar a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en busca de permisos migratorios que les permita avanzar a la frontera norte.

Los extranjeros platicaron para Diario del Sur e indicaron que, como las caravanas anteriores, salen de Tapachula por la falta de atención del INM.

El contingente, que hasta la tarde de ayer sumaba unos 200 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, no había obtenido respuesta en las oficinas de regularización del INM, en esa ciudad fronteriza, por ello busca ser atendido en el estado vecino.

Óscar Gutiérrez, de origen venezolano, indicó que esperaban que el contingente fuera más grande para que no los detengan los elementos del INM o la Guardia Nacional. “Sabemos que a los grupos de 100 o 200 personas Migración los está asegurando y los encierra en la Estación Migratoria Siglo XXI, lugar en donde ya hemos estado la mayoría de nosotros y no queremos regresar”.

Añadió que van para EU y la ciudad es un paso obligatorio para llegar a su destino final, en donde a algunos ya los esperan sus familiares. Además dijo que las niñas, niños, mujeres y hombres caminarán un promedio de 300 kilómetros para llegar a San Pedro Tapanatepec porque saben que ahí les están dando el permiso para continuar en autobuses, y resaltó que ellos no quieren quedarse en México y mucho menos en Tapachula porque no hay trabajo para todos los migrantes. ([Alejandro Gómez, El Sol de México y La Prensa, República y Nacional, p. 5 y 26](#))

Niega asilo a 8 de cada 10 mexicanos



De acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), sólo dos de cada 10 mexicanos que han solicitado asilo a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, lo han conseguido.

La cifra es la más baja registrada desde la llegada de William Clinton a la Casa Blanca en 1993, cuando el gobierno demócrata implementó una serie de reformas migratorias que facilitaron las solicitudes de refugio en la Unión Americana; entonces, cuatro de cada 10 mexicanos consiguió asilo. Durante el gobierno republicano de Donald Trump, en promedio, cuatro de cada 10 connacionales eran aceptados para resguardo en el vecino país y durante las dos administraciones del demócrata Barack Obama, la cifra alcanzó los seis de cada 10.

Según TRAC, organismo de control del gobierno estadounidense con sede en la Universidad de Syracuse, durante el año 2021 cada día un promedio de 100 mexicanos solicitaron asilo a Estados Unidos, de los cuales sólo a 20 se les proporcionó después de pasar un proceso de entre siete y nueve meses.



“En México son amplios los motivos para buscar refugio en otro país, como Estados Unidos, pero cada vez son menos los que lo consiguen. Los mexicanos están siendo los más rechazados de la región”, afirmó a El Sol de México, Jesús Martínez, integrante del Servicio Jesuita, organización dedicada a apoyar a los migrantes a solicitar asilo en el país vecino.

Agregó que durante la administración Biden, quien en su campaña presidencial prometió apoyar la migración, ha resultado más probable obtener refugio en México que en Estados Unidos. “En este momento es más sencillo, más probable, que los migrantes consigan refugio en México, que en Estados Unidos”, subrayó.

En los últimos cinco meses, poco más de 11 mil migrantes han ingresado a Estados Unidos para dar inicio con la petición de asilo político sólo a través de la frontera de Tijuana, de los cuales una tercera parte son mexicanos, según TRAC.

La mayoría de los connacionales que buscan asilo en el vecino país lo hacen escapando de las amenazas de muerte de los cárteles de la droga, según argumentan al momento de ser entrevistados por las autoridades estadounidenses. Disputas territoriales y la pobreza, son otros argumentos que los mexicanos exponen al solicitar asilo en el país vecino.

De acuerdo con datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, al término del primer trimestre del año fiscal 2022, se llegó a un máximo acumulado de un millón 500 mil expedientes de solicitantes de asilo con sólo 578 jueces para procesarlos antes de que concluya el año.

Martínez comentó que las posibilidades de obtener asilo político para alguien que haya sido detenido y se encuentre asegurado en los Centros de Detención Migratorio son casi nulas y que el periodo de internamiento tarda en promedio seis meses. En el caso de que la persona se encuentre en libertad y desee iniciar el proceso, puede durar hasta cinco años en que las autoridades estadounidenses le otorguen asilo.

Para el abogado, la razón de que sean muy pocos los otorgamientos de la protección es por cuestiones políticas y de percepción ciudadana.

“Existe una conspiración binacional de masajear la violencia: México dice que no hay violencia y los americanos se resisten en otorgar el asilo para que se comente que no hay nada de peligro en México”, dijo el abogado.

Según Martínez, los gobernantes no ven la realidad, pues se basan en quejas o reportes que tienen sus mismas instituciones, pero cada vez es menos el número de personas que se atreve a denunciar un hecho de violencia, porque son asesinados. “Migrar en familia, ser mujer, adulto mayor o menor de edad no es garantía de que obtendrán el asilo, se debe comprobar un riesgo real de muerte y las autoridades estadounidenses son muy estricto en esos casos”, agregó el activista.

Durante la administración de Donald Trump comenzó una crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, ya que el republicano puso en marcha el programa Quédate en México, el cual obliga a los extranjeros que pedían asilo a esperar la resolución en territorio mexicano, lo que llenó las ciudades fronterizas de nuestro país de personas en espera de cruzar al norte. ([Roxana González, El Sol de México y La Prensa, Nacional, 8 Columnas y p. 25](#))

Información Migratoria de los Estados

Chihuahua

Venezolanos saturan a la frontera norte



Ciudad Juárez. Miles de migrantes venezolanos saturaron la frontera de México con Estados Unidos, en particular la de Juárez-El Paso, donde en la última semana han cruzado un promedio 660 al día por el río Bravo, de acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza.



El cruce masivo de personas comenzó hace una semana, el 10 de septiembre, justo cuando entró en vigor la Extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos para migrantes de Venezuela, una política para protegerlos de deportaciones y tener permisos laborales.

Los migrantes que cruzan de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas, se forman en espera de atención de las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes improvisaron un centro de procesamiento bajo el puente internacional Santa Fe, junto al muro fronterizo.

Con este arribo masivo de personas, las asociaciones locales temen una nueva crisis humanitaria en Ciudad Juárez donde personas como Norma Elizaria llegan en grupos de decenas de migrantes. "Vengo con 26 personas de mi familia, estamos divididos, unos vienen llegando ya a Ciudad Juárez. Buscamos una oportunidad mejor económica, de salud. Para mí, Venezuela es el país más lindo y bello, pero está difícil la situación económica que tenemos", contó la mujer.

Ante la saturación en los albergues, en la región paseña, algunos instalaron casas de campaña o colchones, además de baños portátiles fuera de la central de autobuses. Otras decenas de indocumentados duermen en un campamento improvisado por las autoridades bajo de la autopista elevada de El Paso.

Un reto más es la alimentación, ya que las autoridades estadounidenses sólo les dan agua, por lo que hay quienes van a Ciudad Juárez a comprar comida y regresan de nuevo a El Paso, o bien, hay un grupo de niños mexicanos que en la noche cruzan para comprarles alimento a cambio de dinero.

LARGAS TRAVESÍAS

La situación en la frontera se ha agudizado desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la semana pasada que extenderá la validez de los permisos de TPS a los venezolanos, pero esto aplica a aquellos que ya estaban protegidos en Estados Unidos.

Aún así, Andy Rojas salió hace 30 días de Venezuela y ahora espera una oportunidad tras cruzar México, donde afronta el maltrato de las autoridades migratorias, según denunció. "Vengo con un compañero de trabajo y deseo poder laborar en Estados Unidos. En México, mucha gente ha sido extorsionada, hay que correrles a los policías", indicó.

Otros no vienen de Venezuela, pero desean también una oportunidad, como el ecuatoriano Bruno Salazar. “La travesía fue peligrosa, pasé por Panamá, doy gracias a Dios que estoy aquí. Fue complicado y duro, tuve que huir por la delincuencia y la inseguridad. No se sorprendan si ven a más ecuatorianos acá”.

“Yo intento cruzar aquí, porque unos amigos cruzaron la semana pasada y le están dejando el pase libre a la gente”, añadió Bruno.

Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que "queda claro" que existe una "crisis" porque no hay "infraestructura para recibir a los migrantes", pero pidió no verlo como un problema de inseguridad. "El Paso es una de las ciudades más seguras de EU, el problema es cuando decimos que la migración es un problema de seguridad pública, ya inmediatamente los calificamos como criminales", dijo. [\(EFE, El Sol de México y La Prensa, República y Nacional, p. 5 y 26\)](#)

Migrantes saturan Cd. Juárez



Miles de venezolanos han saturado la frontera de México con EU, en particular la de Juárez-El Paso, donde en la última semana han cruzado un promedio 660 al día por el río Bravo.

El cruce masivo de personas comenzó hace una semana, justo el día en que entró en vigor la Extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en EU para migrantes de Venezuela, una política para protegerlos de deportaciones y obtener permisos laborales.

Con este arribo masivo de personas, las asociaciones temen una crisis humanitaria en Ciudad Juárez. *(EFE, El Heraldo de México, Estados, p. 9)*

Información Migratoria Internacional

Estados Unidos

Gobernador de Texas envía más autobuses con migrantes a residencia de Kamala



El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió este sábado un nuevo autobús con unos 50 migrantes indocumentados a las puertas de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington, un gesto criticado por organizaciones de derechos humanos.

La mayoría de migrantes son de Venezuela, incluido un bebé de un mes, que fueron apeados en las inmediaciones del Observatorio Naval, al noroeste de la capital estadounidense, residencia de Harris, informó la cadena ultraconservadora Fox News.

Organizaciones humanitarias atendieron a estas personas con alimentación y ropa, y las trasladaron rápidamente a albergues en Washington.

Otros tres autobuses con migrantes enviados por el gobierno de Texas llegaron este sábado a Nueva York, como parte de la estrategia electoralista del gobernador texano para criticar la política migratoria del presidente, Joe Biden.

En abril pasado, Abbott anunció su intención de mandar a indocumentados a Washington, en respuesta a la decisión del gobierno de Biden de rescindir una normativa sanitaria que permitía expulsarlos por la pandemia de COVID-19, que no llegó a ponerse en marcha por el bloqueo de los tribunales.



A principios de agosto, los autobuses con migrantes comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York y este mes a Chicago.

El pasado jueves, dos autobuses fletados por Texas llegaron sin previo aviso a las puertas de la residencia de Kamala Harris en lugar de la estación de trenes de Washington, la Union Station, donde las ONG estaban esperando a los migrantes.

Ese mismo día, el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, se sumó a la estrategia de Abbott y fletó dos aviones para enviar a migrantes indocumentados a Martha's Vineyard, exclusiva isla del estado de Massachusetts, donde tiene una residencia el expresidente Barack Obama (2009-2017).

Conmoción en Martha's Vineyard

En paralelo a las acciones de Abbott, el gobernador de Florida, el ultraconservador Ron DeSantis, ha tomado una iniciativa similar al enviar un autobús con 50 migrantes hasta la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, aunque el gobierno de ese estado es también republicano.

Mientras el gobierno local ha ofrecido a los migrantes un traslado voluntario provisional a una base militar próxima, perdura la conmoción en la comunidad del pueblo isleño de Edgartown, de 5 mil habitantes, del total de 17 mil que tiene Martha's Vineyard.

Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo de la organización Lawyers for Civil Rights, que está ofreciendo asistencia legal a los venezolanos, explicó a Efe en un correo electrónico que no se puede visitar a los migrantes en el campamento donde se encuentran alojados transitoriamente, aunque los abogados sí que han tenido acceso.

Dijo que "no está claro", pero que las familias podrían dejar el campamento "tan pronto como la próxima semana".

Mientras, Edgartown, volvía este sábado a la normalidad después de haberse movilizado para asistir a los migrantes.

Nada más al llegar los venezolanos, la escuela del pueblo se puso a cocinar y a las pocas horas tuvieron que pedir a los vecinos que dejaran de traer alimentos y ropa, porque tenían demasiados y no podían almacenarlos. [\(EFE, La Crónica, P.p.\)](#)

(Staff, Reforma, Internacional, p. 17)

(EFE, El Heraldo de México, Orbe, p. 11)

Ven fracaso de EU en Centroamérica



Ciudad De Guatemala.- Centroamérica se convirtió en uno de los mayores reveses en política exterior del actual Gobierno de Estados Unidos, que pese a prometer democratizar a la región, las naciones se han hundido más en el autoritarismo y la pobreza, señalaron ex diplomáticos y líderes de la sociedad civil.

En junio de 2021, de pie en el Palacio Nacional de Guatemala, la Vicepresidenta Kamala Harris describió una ruptura radical con el enfoque del ex Mandatario Donald Trump sobre la migración no autorizada.

En lugar de construir muros y deportar a menores, Estados Unidos se comprometió a reducir la corrupción y la impunidad en Centroamérica, dando a los cientos de miles de migrantes que abandonan la región cada año una razón para quedarse.

"Si vamos a ser efectivos, si vamos a ser fieles a nuestros principios, debemos erradicar la corrupción dondequiera que exista", aseveró Harris.

"Esa es una de nuestras principales prioridades".

Pero un año después, en Guatemala, el Presidente Alejandro Giammattei ha desmantelado metódicamente los últimos vestigios de instituciones independientes.



Uno por uno, su Gobierno ha encarcelado, exiliado o silenciado a las mismas personas que Estados Unidos dijo que respaldaría en sus esfuerzos para hacer de ese país una sociedad más justa.

En Nicaragua, Daniel Ortega encarceló u obligó al exilio a casi todas las voces críticas, convirtiendo a la nación en un estado totalitario.

En El Salvador, Nayib Bukele, quien ha utilizado medidas enérgicas contra las pandillas para suprimir la libertad de expresión, anunció que buscará un segundo mandato en las próximas elecciones a pesar de la prohibición explícita de reelección de la Constitución salvadoreña.

Incluso en la democracia más fuerte de la región, Costa Rica, el recién elegido Presidente, Rodrigo Chaves, ha lanzado ataques sin precedentes contra periodistas que investigan acusaciones de acoso sexual y mala conducta financiera.

"Todo lo que ha hecho Estados Unidos para estabilizar y mejorar la región no ha dado resultados", aseguró Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, un grupo político anticorrupción guatemalteco, y uno de los últimos líderes de la sociedad civil en el interior del país.

En Guatemala, un juez y un fiscal superior que investigaban casos de corrupción que involucran al Presidente huyeron este año para evitar ser arrestados, a pesar de las súplicas de Washington de proteger sus posiciones.

El director del principal medio independiente de noticias, El Periódico, que cubrió ampliamente esos casos, fue encarcelado en julio, acusado de lavado de dinero.

La falta de voluntad de la Administración de Joe Biden para ejercer más presión sobre esos Gobiernos cada vez más autocráticos se debe en parte al deseo de preservar el apoyo a sus políticas migratorias y de seguridad en Centroamérica, determinaron ex funcionarios estadounidenses y líderes de la sociedad civil.

"El trato es cooperación migratoria a cambio de críticas censuradas", apuntó Claudia Samayoa, una destacada defensora de los derechos humanos guatemalteca.

Funcionarios estadounidenses y personas cercanas a la Administración aseguran que impulsar la democracia en Centroamérica es una tarea a largo plazo y que la reacción autoritaria muestra que los funcionarios corruptos se sienten amenazados por las políticas de Washington.



"Reconocemos que estamos lidiando con desafíos y problemas profundos y arraigados que existieron durante siglos", dijo Ricardo Zúniga, un alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"Este es un proceso; entendemos que estas son condiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana".

Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua han respondido al llamado de Washington de aliados locales acelerando los ataques a las instituciones democráticas dentro de sus naciones.

La Administración Biden ha revocado las visas de más de 60 funcionarios gubernamentales y empresarios en Centroamérica por socavar la democracia y ha expresado públicamente su apoyo a los líderes cívicos que enfrentan persecución.

Pero los diplomáticos y los líderes de la sociedad civil calificaron la respuesta de Estados Unidos como silenciada y dijeron que solo ha envalentonado a los autoritarios.

"Estados Unidos ha perdido su capacidad de influir en la región", externó Claudia Escobar, ex jueza guatemalteca de alto rango que ahora enseña en la Universidad George Mason en Washington.

Hasta ahora, la Administración Biden se ha abstenido en gran medida de utilizar sanciones financieras en América Central que Trump utilizó ampliamente, aunque con poco efecto, en las vecinas Cuba y Venezuela.

Desde que asumió el demócrata, sólo siete funcionarios centroamericanos y sus asociados han sido sancionados en virtud de la llamada Ley Global Magnitsky, que permite a EU congelar y expropiar bienes de ciudadanos extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos.

El Gobierno estadounidense también se ha abstenido en gran medida de apuntar a las economías centroamericanas o las grandes empresas cercanas a los regímenes autoritarios, una decisión que, según los críticos, refleja el temor de la Casa Blanca de desestabilizar las economías regionales y desencadenar más migración. (*The NYT News Service, Reforma, Internacional, p. 18*)



Italia

Barco humanitario desembarca de emergencia a 427 migrantes en Italia

Roma. El barco Sea-Watch 3 informó ayer que durante la mañana atracó en el puerto de Reggio Calabria, al sur de Italia, para desembarcar a 427 migrantes que habían sido rescatados, después de que se declarara en emergencia antier.

Según la organización humanitaria Sea Watch, con sede en Berlín, se trata de personas que fueron salvadas en distintas operaciones y que pudieron desembarcar después de varios días, ya que se esperó la respuesta a la petición de un puerto seguro.

Luego de que empeoró la situación a bordo y era urgente la evacuación de una persona, nuestra nave tuvo que declarar el estado de necesidad. Finalmente las autoridades italianas asignaron un puerto, indicó la ONG en redes sociales.

La agrupación anunció el estado de necesidad tras 10 solicitudes de puerto seguro y de advertir que estaba obligada a atracar aunque no tuviera autorización.

Por su parte, otro buque alemán, el Sea-Eye 4, atracó el viernes en Tarento, en la región italiana de Apulia, con 129 inmigrantes. Según la organización, algunos de los rescatados llevaban casi dos semanas a bordo antes de que las autoridades italianas les dieran autorización para desembarcar.

En tanto, el barco de rescate Humanity 1, de la organización berlinesa SOS Humanity, sigue esperando la asignación de un puerto seguro con 414 personas a bordo. El grupo ha señalado que, después de más de una semana, la situación a bordo se está deteriorando.

El frío y las enfermedades gastrointestinales se propagan por el espacio reducido. Varios niños tienen fiebre de hasta 40 grados, explicó la embarcación en un comunicado. Un hombre tiene una herida de bala que no puede ser tratada en la nave, señaló.

Según datos de Roma, en lo que va de 2022 han llegado a Italia a través de la ruta mediterránea más de 66 mil inmigrantes, frente a los 43 mil del mismo periodo del año anterior. Durante los últimos ocho meses han muerto o desaparecido mil 39 personas en el Mediterráneo, según cifras de la ONU. ([Europa Press y Dpa, La Jornada, Mundo, p. 22](#))

Ucrania

Critican en Ucrania propuesta de AMLO



Mykhailo Podoliak, asesor del Jefe de la Oficina del Mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, acusó ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador usa la guerra para su beneficio político al fijar una postura neutral y no imponer sanciones a Rusia por los crímenes cometidos en Ucrania.

"Los 'pacificadores' que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su 'plan' es un plan ruso", expresó Podoliak.

El viernes, desde el Zócalo capitalino y ante miles de militares que desfilaron con motivo de la Independencia, el Presidente López Obrador propuso un plan para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, y establecer una tregua mundial de 5 años, además de reprobando el papel de las "grandes potencias" en el conflicto.

Ante los ex Presidentes Evo Morales y José Mujica, de Bolivia y Uruguay, sus invitados de honor, también acusó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desempeñado un papel ornamental en la invasión rusa.



"Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia", señaló López Obrador.

"Lo cierto es que nada o muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental".

Sostuvo que, aún más reprobable que la ONU, ha sido el proceder de las grandes potencias que, de manera explícita o silenciosa, se "posicionan" ante el conflicto sólo para servir a sus intereses hegemónicos.

"Por eso no puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. La invasión de Rusia a Ucrania es, sin duda, reprobable", enfatizó.

Además criticó a la OTAN por negar a Ucrania ser parte de ella, pero al mismo tiempo ofrecerle armas y aplicar sanciones económicas y comerciales contra Rusia.

Y propuso un comité para el diálogo mundial y la suspensión de las pruebas nucleares.

"Sin paz no habrá ni crecimiento económico ni mucho menos justicia", dijo López Obrador. (*Staff, Reforma, Nacional, p. 5*)

[\(Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 12\)](#)

(Ernesto Méndez, *Excelsior*, P.p.)

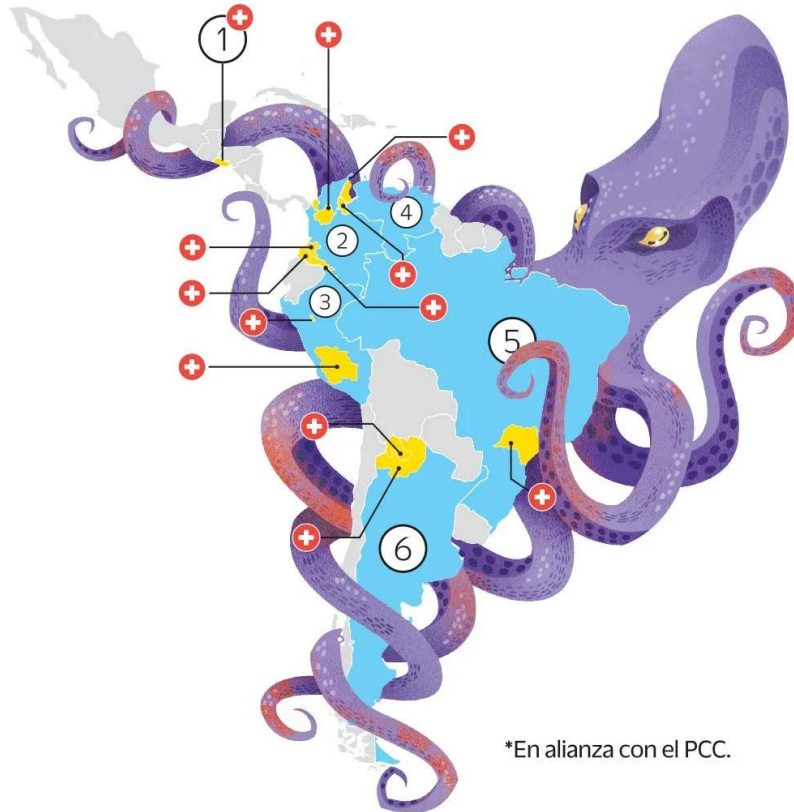
(Reuters, Afp, EFE y Europa Press, *El Sol de México, Mundo, p. 22*)

(Ap, *El Universal*, p. A2)



Seguridad

Narcotráfico mexicano se extiende en AL



*En alianza con el PCC.

	①  El Salvador	②  Colombia	③  Perú	④  Venezuela	⑤  Brasil	⑥  Argentina
Cártel de Sinaloa						
Cártel del Golfo						
La Familia Michoacana						
Los Zetas						
CJNG						
Cártel de Oaxaca						
Cártel de Juárez						
Cártel de Michoacán						

Fuente: Elaboración propia, con información del Grupo de Diarios América (GDA)



Los cárteles mexicanos de la droga han extendido sus redes en Latinoamérica. Sin embargo, en vez de tener células en otros países, han optado por una estrategia más práctica: forjar alianzas con los grupos locales. De este modo, ganan en invisibilidad y en rapidez.

En algunos casos, como en Colombia y en Venezuela, estas alianzas están más arraigadas, el negocio más delimitado e incluso, de acuerdo con la investigación del Grupo de Diarios América, alcanza al aparato de seguridad y de gobierno. Los grupos con los que se vinculan tienen nombre y apellido: de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Clan del Golfo, pasando por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En suelo venezolano, la liga es con el llamado Cártel de los Soles.

El Cártel de Sinaloa es, sin duda, el más poderoso y con más nexos en la región, seguido de cerca por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades mexicanas advierten que se trata de las dos organizaciones criminales más importantes en México, con carácter transnacional y cuyas redes se extienden no sólo a Centro y Sudamérica, sino a Europa y al interior de Estados Unidos, destino final de la mayor parte de la droga que se mueve desde Latinoamérica.

Para los mexicanos, estas alianzas son clave y le han permitido mantener el liderazgo en el negocio del tráfico de drogas y seguir inundando el mercado estadounidense, a pesar de que las medidas de seguridad en las fronteras de Estados Unidos se elevaron desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas, el fortalecimiento de los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha sido paralelo a su fortalecimiento al interior del país. “Notable su presencia y avance en Colombia, Ecuador y la región centroamericana, donde controlan en tráfico de drogas por tierra, mar y aire, en alianzas con las organizaciones locales”, describió.

Y añadió: “Es notable e importante el avance de los más poderosos cárteles mexicanos en América Latina; por eso la preocupación de los Estados Unidos en cuanto al fentanilo”.

Con Colombia, un negocio en toda forma

Colombia es el mayor productor de cocaína a nivel mundial. En el país, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, a través del Sistema Integrado de Medición de Cultivos Ilícitos, Simci, 2020, se encuentran 143 mil hectáreas sembradas con matas de coca, lo que equivale a una producción anual de mil 180 toneladas de cocaína.



Los narcocultivos se concentran en cinco departamentos: Norte de Santander (40mil 84 hectáreas), Nariño (30 mil 751 hectáreas), Putumayo (19 mil 986 hectáreas), Cauca (16 mil 544 hectáreas) y Antioquia (12 mil 90 hectáreas).

Es en estas regiones donde se concentran las principales redes dedicadas a la producción de base de coca y clorhidrato de cocaína: el clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, además de algunos pequeños grupos de narcotraficantes.

El negocio está muy bien delimitado. Estos grupos compran la base o pasta de coca a los campesinos, y emisarios mexicanos compran a los colombianos.

Autoridades y residentes locales en Colombia señalan que no hay una presencia constante de miembros de los cárteles mexicanos; más bien, de unos cinco años a la fecha, se ven, de cuando en cuando, emisarios del Cártel de Sinaloa, seguido por el CJNG, pero también de los Zetas e incluso del Cártel de Oaxaca. Estos emisarios viajan por periodos cortos a las zonas cocaleras para verificar la cantidad de droga pactada, y la calidad.

Según la Policía Nacional, 75% de la cocaína que se produce en Colombia es vendida a los cárteles mexicanos.

“Hay muy poca evidencia en Colombia de la presencia de capos mexicanos; envían emisarios. Prueba de ello es que no ha habido capturas de por parte de las autoridades. [Los mexicanos] Son compradores, porque Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, entonces van a las zonas cocaleras”, afirma Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac.

“Uno escucha que los mexicanos vienen, sobre todo cuando alquilan los grilles o centros nocturnos porque las fiestas son bravas, traen hasta mujeres de Cali o Popayán”, dijo al diario colombiano un labriego de la región en Tumaco que prefirió no ser identificado.

El hombre, de 34 años, se dedica a la siembra de la mata de coca. Le pagan bien, explica. Él nunca ha tenido contacto directo con los mexicanos “pero uno sabe cuando están, porque los mueven en las 4x4 y se ven los combos más armados, pero no más. Ellos son los que compran la coca”.

Otro campesino, de la zona de Tibú, en el Norte de Santander, expresa su preocupación, ya que desde hace tres meses “los mexicanos no están comprando la coca y ahora tenemos mucha producción almacenada y eso nos genera problemas, a tal punto, que como aquí solo se comercia coca, pues estamos en trueque para poder comer, intercambiamos víveres”.



Los campesinos cuentan que la base de coca que procesan se la venden a los grupos (disidencias en especial), y los ilegales tienen la forma – cristalizaderos – para procesarla a clorhidrato y se la venden emisarios de carteles de ‘Jalisco Nueva Generación’ y de ‘Sinaloa’.

“Ellos se meten bien adentro, negocian y se llevan la coca por las pistas al otro lado (Venezuela)”. Sobre la razón por la que los mexicanos se alejaron, dice que “nadie tiene claro que pasó. Pero se rumora que los ‘faltonearon’ con una carga o con la calidad y no volvieron”.

La situación de sobreproducción, detalla, es muy evidente porque el kilo está bajando: “Antes del problema estaba sobre los 3 millones 500 mil pesos colombianos (16 mil 65 pesos mexicanos), hoy está en 2 millones 800 mil pesos colombianos (12 mil 852 pesos mexicanos).

Venezuela, el aeródromo del narco y el pueblo de Sinaloa

En el caso de Venezuela, InSightCrime documentó en 2020 la presencia del Cártel de Sinaloa en el estado de Zulia. Según la organización, la presencia del narco mexicano ha crecido a tal punto que “existe un pueblo en el estado que ha sido rebautizado con el nombre de Sinaloa”.

Ganaderos, productores y lugareños son testigos de la llegada de mexicanos, que suelen estar de paso. Como en Colombia, se hacen notar con “lujosas camionetas último modelo, fiestas con narcocorridos de fondo, prostitución y otra serie de excentricidades que han cambiado la cotidianidad de esta zona”.

En un informe de 2021, la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo contar con evidencias de que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en Zulia, “donde se ha aprovechado de las pistas de aterrizaje para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que amplió sus actividades a Venezuela”.

La mayoría de pistas clandestinas que utilizan los cárteles mexicanos están ubicadas en este estado de Zulia, que limita con la región del Catácumbo en Colombia.

De acuerdo con el reporte de InSightCrime, los narcos mexicanos llegan “a las fincas de productores agropecuarios ofreciendo grandes sumas de dinero para que les permitan utilizar las pistas existentes o habilitar espacios para el aterrizaje y despegue de narcoaviones”. Ganaderos reportan que el pago va de 40 mil (807 mil pesos mexicanos) a 60 mil dólares (un millón 210 mil pesos mexicanos) por cada “toque” (aterrizaje).



El poder de los cárteles mexicanos es tan grande que el CJNG y Sinaloa enviaron “negociadores” para frenar los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN que les generaban pérdidas millonarias, al trabar el envío de cargamentos de drogas.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, destaca otro aspecto de la operación de los cárteles mexicanos en Venezuela: la alianza con la red conocida como Cártel de los Soles, que ha sido ligada al chavismo y que opera de forma cada vez más activa, controlando, según Vigil, “el movimiento de la cocaína a través de sus socios mexicanos”.

Jeremy McDermott, codirector y cofundador de InsightCrime, un centro de investigación sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe, describe a Los Soles, en declaraciones a la cadena británica BBC, como “un grupo de círculos o redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico”.

Así, afirma, “la diferencia en Venezuela comparado con México y Colombia es que dentro de Venezuela un buen porcentaje del negocio está manejado por dentro del Estado”.

Durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, recuerda El Nacional, se confirmó la relación del narco mexicano con estructuras de poder en suelo venezolano.

La fiscal Gina Parlovecchio presentó audios de pláticas entre “El Chapo” y “Toño”, un hombre de origen dominicano a quien el narco colombiano Alex Cifuentes-Villa recomendó para distribuir droga en Estados Unidos. En la conversación, el mexicano le reclamaba por la tardanza para que llegaran “los muebles”, aludiendo a avionetas que irían a “Loco”. Según “Toño”, así era como el sinaloense llamaba a Hugo Chávez.

En declaraciones a BBC, Cliver Alcalá, exgeneral cercano a Hugo Chávez que luego rompió con Nicolás Maduro, habló de los soles, y reconoció que “de que existe una estructura que permite que la droga pase a Colombia, pase por Venezuela y llegue a Europa y Estados Unidos, existe. Las evidencias están cuando la droga llega a esos lugares”, dijo.



De El Salvador para México, lecciones de violencia

La presencia de los cárteles mexicanos en El Salvador es más diversa: del Cártel de Sinaloa al Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, Los Zetas y el CJNG, según información de la DEA. Estos grupos están activos en el país desde 2012, aunque no fue hasta 2018 y 2019 que se conocieron más detalles de sus operaciones. La presencia más reciente es la del CJNG.

En este país, los narcos mexicanos se aliaron con los jefes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13), que a pesar de estar en prisión, controlan a sus bases, diseminadas en células (clicas) a lo ancho del país.

Ese control, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del grupo de tarea Vulcano (formado por la mayoría de agencias de seguridad estadounidenses) convierte a la MS-13 en un actor clave en el trasiego de droga que viene de Sudamérica, hacia Estados Unidos.

De acuerdo con una acusación en Estados Unidos contra 14 jefes históricos de la MS-13, éstos establecieron contacto con los cárteles ya mencionados para “obtener narcóticos y armas de fuego”, así como para hacer negocios relacionados con “la trata y el contrabando de personas”.

Aunque en algunos países se emulan prácticas de violencia típicas de los cárteles mexicanos, en el caso de la MS-13, la relación ha sido exactamente al revés. Según investigaciones de la DEA, fue la Mara Salvatrucha la que en su momento adiestró a Los Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva para ejercer extrema violencia.

Perú, negocios con el hijo del Chapo

En Perú, las autoridades han detectado presencia del Cártel de Sinaloa desde hace 10 o 12 años. En especial, mantienen vínculos con traficantes del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la región del Alto Huallaga, ambos en la selva peruana.

En este caso, el fin del negocio es comprar la cocaína que se produce en el Vraem, donde clanes familiares transforman la pasta base en clorhidrato de cocaína. Los traficantes mexicanos acopian la droga en ciudades ubicadas cerca de los puertos, como Piura, Trujillo y el Callao y la “siembran” en barcos con destino a Estados Unidos o Europa. En menos ocasiones, utilizan avionetas que llevan la droga a Bolivia.

El papel de los clanes peruanos se limita, básicamente, a trasladar la droga de la selva a las ciudades costeras.



En Argentina, narcotráfico y lavado

En 2008, un crimen triple de empresarios farmacéuticos dejó al descubierto el tráfico a gran escala desde Argentina para los cárteles mexicanos de las drogas, en especial para el Cártel de Sinaloa.

En 2017 fueron confiscados casi 2 mil kilos de cocaína y fueron condenados tres mexicanos ligados al Cártel de Michoacán. Actualmente se tienen detectadas células de los cárteles mexicanos operando en el norte de Argentina (Salta-Jujuy), cerca de la frontera con Bolivia, que es uno de los mayores proveedores regionales de cocaína, junto con Perú y Colombia.

Para operar, los mexicanos se alían con grupos locales. Trabajan en células, para garantizar el mercado de la cocaína y el incipiente mercado de la heroína. Aportan conocimiento y recursos, más que actuar directamente en la logística de producción y distribución.

Además del narcotráfico, también se dedican al lavado de dinero, con inversiones en distintos sectores productivos en Argentina, principalmente en el mercado inmobiliario.

No se han reportado casos de violencia asociados a los cárteles mexicanos; en cambio, los narcos mexicanos aportaron a las bandas locales con las que se fusionaron su conocimiento en cuanto a métodos extorsivos y de venganzas o represalias, con mutilaciones o ejecuciones.

“Argentina, desde hace décadas, no tiene un programa nacional de lucha contra el narcotráfico. Hay un trabajo reactivo que se vicia con la incautación de estupefacientes, fundamentalmente de marihuana, y ahí se estanca. No se toca la matriz subterránea de la criminalidad porque no hay investigación criminal rigurosa. Eso facilita la penetración de narcos mexicanos y de otras nacionalidades”, advierte la socióloga Laura Etcharren, especialista en materia de narcotráfico.

“Hoy, en Argentina los mexicanos son un recurso más de la criminalidad. Ya no son el recurso por excelencia, como lo fueron hasta hace poco menos de diez años. Argentina es un ecosistema narco donde todas las vertientes del crimen organizado tienen capacidad operativa. Que los diferentes colores criminales no entren en conflicto se debe a los acuerdos dentro de ese ecosistema. La misma criminalidad se regula para poder operar, testear y ampliar sus estructuras”, añade.



Brasil, la alianza con el PCC

Los cárteles mexicanos se infiltraron también en Brasil, el gigante sudamericano. Investigaciones de la Policía Federal y de la Policía Civil de Sao Paulo han detectado la presencia de narcotraficantes del CJNG, de Sinaloa y de Juárez.

Las pesquisas revelan que en los últimos 10 años, los narcos mexicanos han venido operando a través de acuerdos con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización criminal no sólo de Brasil, sino de Sudamérica, que a su vez tiene alianzas con grupos en otros países, como La Banda de los Monos, en Argentina, y a la que se atribuyen múltiples asesinatos.

Aunque existen pocas pruebas sobre los acuerdos entre el PCC y los cárteles mexicanos, en 2019 el Ministerio Público denunció a Decinho, uno de los jefes del PCC en Sao Paulo, y en ese momento señaló que el Cártel de Sinaloa era un “proveedor de drogas a gran escala para el PCC, abasteciendo tanto el mercado interno como exportando drogas a Europa”.

A partir de las investigaciones, se revela también el creciente papel de Brasil como plataforma para el envío de droga de los cárteles mexicanos a Europa. Uno de esos casos fue el que llevó a la detención, en 2016, de cuatro mexicanos, acusados de pertenecer al CJNG y que pretendían enviar un cargamento de 90 kilos de cocaína a Europa.

Como sucede en el resto de países incluidos en esta investigación, en términos generales la presencia de los cárteles mexicanos no se ha traducido en mayor violencia en esas naciones, o al menos no una que pueda ser ligada directamente al narco mexicano.

Sin estrategia conjunta

Pese a la confirmación de las alianzas entre los narcos mexicanos con grupos en Colombia, Venezuela, El Salvador, Argentina, Brasil y Perú, no existe una estrategia conjunta de parte de los gobiernos afectados para combatir este fenómeno. Cada Estado ha emprendido su propia lucha, a nivel interno, o apenas en comunicación con algún otro, o ignorado de plano el asunto.

Para el experto mexicano Márquez Blas, un factor importante que ha facilitado el poderío de los cárteles en la región es el deterioro de la cooperación bilateral y multilateral en la región entre las corporaciones policiales y de procuración de justicia. “La cooperación entre las fuerzas del orden se ha deteriorado mientras que la coordinación de organizaciones criminales transnacionales se ha fortalecido”, expone.



Colombia tiene acuerdos de cooperación internacional con todos los países del hemisferio, a excepción de Venezuela (aunque el gobierno de Gustavo Petro ha dado los primeros pasos para reactivarla), pero no una estrategia específica de combate a la presencia del narco mexicano.

Estados Unidos es su principal socio en la lucha contra las drogas. Las autoridades trabajan de manera coordinada, compartiendo información en tiempo real, por ejemplo, para desarrollar las operaciones e interdicción.

Con Petro en el poder, la estrategia podría cambiar: el presidente ha ofrecido diálogo al Clan del Golfo, al ELN y otros grupos, y ofrecido garantías a cambio de un acuerdo de paz. Otra de las propuestas de Petro es la legalización de la cannabis con fines recreativos, lo que podría tener cierto impacto en el mundo del narcotráfico.

En Venezuela, en junio de 2021 el presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno se planta “firme para acabar con el narcotráfico en nuestro territorio, ratificamos el compromiso de garantizar una patria segura, próspera y libre de drogas”. Se trata, en sí, de una estrategia enfocada en el decomiso de drogas, pero no en la lucha contra los cárteles.

El rompimiento del diálogo con Colombia ha beneficiado a los grupos dedicados al narcotráfico, que operan sin mayores problemas.

Tampoco en El Salvador existe, al menos públicamente, algún tipo de diálogo con otros gobiernos de la región para enfrentar el problema de manera conjunta. En el más reciente encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, en mayo pasado, no hubo alusión a algún trabajo conjunto sobre narcotráfico.

En Argentina, recientemente el Ministerio de Seguridad de la Nación fomentó acuerdos de cooperación con los gobiernos de Paraguay y Brasil, especialmente para el intercambio de información relativa a las operaciones de organizaciones en las zonas de frontera. La principal preocupación de ese esfuerzo tripartito es, actualmente, la actividad del Primer Comando Capital (PCC). Pero no hay algo similar con el gobierno de México.

Tampoco en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro no es muy cercano con el de López Obrador, siendo de tendencias políticas totalmente opuestas.

En Perú, la estrategia de los gobiernos de los últimos años ha sido la de “ahogar” las zonas donde se produce cocaína, prohibiendo el ingreso de insumos químicos y desplegando un plan de erradicación de cultivos de hoja de coca. Sin embargo, investigaciones indican que el abandono del Estado a estas localidades, y la corrupción de autoridades civiles y de los institutos armados, ayuda a que el narcotráfico se mantenga como la principal actividad económica en ciertas regiones.

A pesar de ser los principales productores de cocaína en el mundo, Colombia, Perú y Bolivia operan de forma independiente.

*Con la colaboración del Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias. ([Guadalupe Galván, El Universal, P.p.](#))

FGR: vigente, solicitud para extraditar a El Mini Lic



La Fiscalía General de la República (FGR) informó que sigue vigente la solicitud de extradición de Dámaso López Serrano, El Mini Lic –autor intelectual del homicidio del corresponsal de La Jornada, Javier Valdez Cárdenas– y que se encuentra procesado en Estados Unidos por diversos delitos. Resaltó que insistirá ante el gobierno estadounidense que la entrega del presunto jefe del cártel de Sinaloa se lleve a cabo a la brevedad posible.



En un comunicado, la FGR aclaró eso debido a que ayer se difundieron versiones de que Dámaso López había sido liberado por una corte federal del sur de California, de acuerdo con información del portal del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, donde se reportó que El Mini Lic, con el número de interno 63436-298, fue puesto en libertad el viernes, tras haber cumplido una sentencia de 72 meses de cárcel.

Fuentes de la FGR consultadas revelaron que Dámaso López sigue encarcelado, solamente se le sentenció en uno de los juicios que enfrenta en aquel país y tiene procesos pendientes por narcotráfico y por su situación migratoria.

Refirieron que la Unidad de Asuntos Internacionales y la representación de la FGR ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos trabajan en colaboración con las autoridades estadounidenses, pues la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión entregó al gobierno de aquel país la solicitud de extradición.

Desde 2017, El Mini Lic huyó de México e ingresó a Estados Unidos, donde ofreció ser testigo colaborador en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, lo que le ha servido para obtener beneficios legales, pero la orden en su contra expedida por un juez mexicano sigue vigente y eso lo trabaja la representación de la FGR.

En el comunicado que la fiscalía difundió anoche, indicó que “desde 2020 obtuvo orden de aprehensión federal en contra de Dámaso ‘L’, por su presunta autoría intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas; obteniendo también ficha roja de Interpol y gestionando de inmediato el proceso de extradición hacia México de dicho individuo”.

A solicitud del área de Asuntos Internacionales de la propia Fiscalía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado, verbalmente, que dicho individuo sigue procesado por otros delitos en ese país, frente a lo cual la FGR insistirá en su gestión de extradición hacia México para que ésta se lleve a cabo a la brevedad posible.

Debe ser procesado en México: Griselda Triana

En entrevista aparte, Griselda Triana, viuda de Javier Valdez –asesinado el 15 de mayo de 2017 por un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa–, llamó a las autoridades mexicanas a intervenir para lograr la extradición de Dámaso López, particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que exigir al gobierno estadounidense que devuelva a este individuo a México para ser procesado, enjuiciado y sentenciado.



Rechazó que El Mini Lic ingrese al sistema estadounidense de testigos protegidos. Este sujeto no tiene por qué pasearse con total impunidad por Estados Unidos con otra identidad e incluso con trabajo... Entonces, esto es muy grave y no podemos permitir que eso suceda. [\(Gustavo Castillo García, Arturo Sánchez Jiménez y Jessica Xantomila, La Jornada, P.p.\)](#)
(Benito Jiménez, Reforma, Nacional, p. 7)
(Raul Flores, Excélsior, P.p.)
[\(Alfonso Rodríguez, El Sol de México, P.p.\)](#)
(Paris Salazar, El Heraldo de México, País, p. 6)